

Santiago, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés.

A los escritos folios 108459-2023 y 108588-2023: a todo, téngase presente.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos quinto a séptimo, que se elimina.

Y teniendo en su lugar y además presente:

1º) Que conforme a los antecedentes incorporados y las alegaciones efectuadas por los intervinientes en estrados, aparece que el amparado fue condenado a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo y al pago de una multa ascendente a la suma de \$ 266.369.634.-, sustituyéndose la pena por libertad vigilada intensiva, estimándose, en consecuencia, en su oportunidad por el órgano jurisdiccional competente, que podría lograrse la rehabilitación del amparado en libertad, por lo que aparece desproporcionado luego sustituir la sanción pecuniaria por reclusión por el plazo máximo establecido en el artículo 49 del Código Penal, esto es, seis meses, más si se tiene en consideración que el propio condenado ha consentido con la prestación de servicios en beneficio de la comunidad para efectos de satisfacer el monto de la multa;

2º) Que, también debe tenerse presente que es el Ministerio Público quien debe acreditar la suficiencia de bienes del condenado para pagar la multa impuesta, obligación que no cumplió en la audiencia fijada al efecto.

Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se revoca** la sentencia apelada de doce de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el Ingreso Corte N° 984-2023, en cuanto rechaza el recurso de



amparo interpuesto en favor de José Luis Suárez Castro, y en su lugar **se declara que éste queda acogido**, dejándose sin efecto la resolución que sustituye la multa impuesta por reclusión por el plazo de seis meses, y se sustituye dicha sanción por prestación de servicios en beneficio de la comunidad, debiendo citarse por el juez de garantía no inhabilitado a una audiencia a fin de determinar el período y condiciones en que deberá llevarse a cabo la prestación de servicios.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Valderrama, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada en virtud de sus propios fundamentos.

Regístrese, comuníquese por la vía más expedita y, una vez hecho, devuélvase.

N° 84.045-2023.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., Ministro Suplente Jorge Luis Zepeda A. y Abogado Integrante Ricardo Alfredo Abuaud D. Santiago, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

